

Información Migratoria Nacional

En 10 meses cruce de migrantes al mínimo



Del primero de octubre de 2024 al 20 de agosto pasado, el número de encuentros de personas en situación migratoria irregular pasó de 3640 a 285, una reducción de 91 por ciento; el registro más bajo en casi las últimas cinco décadas, precisó la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lleva Juan Ramón de la Fuente.

A propósito del tema, Fátima Ríos González, directora general de Movilidad Humana y Desarrollo de la Cancillería explicó que en los últimos meses se ha observado una disminución constante de los flujos migratorios, tanto de personas mexicanas como extranjeras, que están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos.

Asimismo, y como parte del seguimiento puntual a los recientes operativos de control migratorio realizados por autoridades estadounidenses, Roberto Velasco Álvarez, jefe de Unidad para América del Norte, informó que al corte del 20 de agosto de este año, la red de consulados en Estados Unidos ha realizado 6 mil 326 visitas a centros de detención, un promedio de 30 al día.

En el caso específico del centro de detención de Everglades, Velasco precisó que a través del Consulado General de México en Miami se han realizado cinco visitas y se han entrevistado, hasta el momento, a 118 connacionales.

Mientras que la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva Ruiz, destacó por su parte que hasta el 20 de agosto se han brindado más de 13 mil 100 asesorías legales a connacionales en tierras estadounidenses.

Destacó que se trabaja con más de 300 proveedores que brindan asesoría y representación legal gratuita o a bajo costo a connacionales en las principales áreas de derecho estadounidense, más de la mitad enfocados en materia migratoria. (Paris A. Salazar, *El Heraldo de México*, País, p. 4)

Destapó masacre de San Fernando el horror de migrar por México: ONG

La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, es un crimen que sigue en la “impunidad”, ya que a 15 años de estos hechos únicamente se tienen dos sentencias condenatorias, aún hay nueve víctimas sin ser identificadas y las familias no han recibido ningún tipo de reparación por parte de las autoridades mexicanas, denunció la organización Fundación para la Justicia.

Eduardo Rojas, coordinador de estado de derecho de la fundación que representa a algunos de los deudos, señaló que en ninguna de las sentencias se abordó la privación de la libertad y posterior asesinato de las 14 mujeres y 58 hombres de Centro y Sudamérica por integrantes del cártel de Los Zetas, sino que fueron por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

En su momento fueron consignadas 15 personas por los hechos, pero fue hasta 2021 cuando se emitieron las dos primeras sentencias. A la fecha, no hay ninguna investigación sobre el posible nexo entre autoridades y las redes criminales, aseguró.

Este crimen perpetrado durante el gobierno de Felipe Calderón, quien declaró la guerra al narcotráfico, “destapó el horror, hasta entonces silencioso, de migrar por México”, indicó la fundación. Las 72 personas fueron asesinadas por la espalda, apiladas y abandonadas a la intemperie. Hasta el momento, han sido identificadas 63 víctimas originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil e India.

El experto apuntó que se requiere de “instrumentos extraordinarios” con la capacidad para investigar esta tragedia desde un enfoque de “macrocriminalidad” y de derechos humanos.

“Se trata, en la masacre de los 72 migrantes, de expedientes que en realidad requerirían de un equipo interdisciplinario solamente para este caso; (sin embargo), lo que tenemos es que muchas de estas masacres están siendo asignadas a un solo Ministerio Público”, subrayó.



Rojas sostuvo que las familias han tenido que enfrentar el “abandono institucional”, particularmente –dijo– la experiencia con la Fiscalía General de la República “ha sido bastante negativa”.

Expuso que tuvieron que pasar nueve años para acceder al expediente, peritajes y averiguaciones previas, producto de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Pasar nueve años sin tener ese expediente implica que las propias víctimas no pudieran conocer qué es lo que se estaba realizando y que no pudieran proponer actos de investigación”, reprochó.

Asimismo, apuntó que la masacre no es un hecho aislado, sino consecuencia de una “violencia sistemática” contra personas migrantes en la región.

Rosmery Yax Canastuj, coordinadora de la oficina de la fundación en Guatemala, coincidió en lo anterior y recordó que en 2011, en el municipio de San Fernando, también fueron hallados 195 restos de personas en 48 fosas clandestinas, lo que revela una “repetición de patrones”.

Esto, dijo, evidencia que después de salir a la luz pública el crimen contra los 72 migrantes, el 24 de agosto de 2010, “no se tomaron las medidas necesarias” de no repetición.

La falta de investigaciones permitió que se siguieran cometiendo otros “crímenes atroces” como el hallazgo de 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León (2012), y las masacres de Güémez (2014) y Camargo (2021), en Tamaulipas.

La especialista llamó a los gobiernos de los países de origen de los 72 migrantes a no olvidar que aún hay procesos pendientes y subrayó la importancia de la coordinación entre las diferentes autoridades para garantizar el acceso a la verdad, reparación y justicia a los deudos. ([Jared Laureles, La Jornada, Política, p. 4](#))

Información Migratoria de los Estados

Coahuila

Admite funcionaria retiro de visa de EU

PIEDRAS NEGRAS.- **Sonia Villarreal Pérez, Subsecretaria de Gobierno en la Región Norte de la Administración del Gobernador de Coahuila, el priista Manolo Jiménez, confirmó ayer que las autoridades migratorias de Estados Unidos le cancelaron su visa.**



Aunque los hechos se dieron desde el martes pasado, cuando cruzaba a Eagle Pass, la también ex Secretaria de Seguridad en el pasado sexenio tricolor de Miguel Riquelme y ex Alcaldesa de Piedras Negras no informó de la revocación hasta que empezaron a circular versiones periodísticas el viernes.

Respecto de su esposo Jorge Manuel Barajas Hernández, quien es jefe regional de la Policía Estatal, afirmó que a él no le quitaron su visa.

En una entrevista con el medio 4P Noticias, de la frontera de Coahuila, Villarreal dijo que ignora la razón por la que le cancelaron su visa, pero estimó que se debería a su embarazo, ya que el Gobierno de Donald Trump ha girado instrucciones para restringir que extranjeros den a luz en Estados Unidos.

La funcionaria estatal relató que los agentes fronterizos le realizaron un interrogatorio exhaustivo y luego le negaron, sin explicación, el permiso de ingresar a Estados Unidos.

"Realmente no me dijeron el motivo ni me entregaron algún papel o algo", contó Villarreal a la reportera Camelia Muñoz.

"Yo supongo que es por mi embarazo", agregó, "porque ya estoy a casi tres o dos semanas de dar a luz y mi primer hijo nació en Estados Unidos".
(Rolando Chacón, Reforma, Nacional, p. 12)

Información Migratoria Internacional

Estados Unidos

Benefactores de Trump hacen gran negocio con cárceles para migrantes



Para muchos trabajadores u organizaciones que dependen del gobierno federal, el regreso del presidente Donald Trump al cargo ha significado recortes de empleos, fondos y agencias enteras. De hecho, el Departamento de Eficiencia Gubernamental afirma haber recortado 202 mil millones de dólares .

Pero una industria ha experimentado un desarrollo exponencial y se espera que siga creciendo aún más: la detención de inmigrantes .

“Las empresas de prisiones privadas han estado muy entusiasmadas desde noviembre pasado ante la perspectiva de ganar miles de millones de dólares a expensas de todos los estadounidenses”, dijo Stacy Suh, directora de Detention Watch Network.

Y las empresas se aseguraron de ayudar a que Trump fuera elegido.

Las dos principales empresas de detención de Estados Unidos, Geo Group y CoreCivic, estuvieron entre los donantes más notables de la campaña de Trump el año pasado: sus ejecutivos y subsidiarias proveyeron un total de 2.7 millones de dólares a la campaña del presidente y a los comités de acción política asociados.



CoreCivic incluso donó más de 500 mil dólares para la toma de posesión de Trump este año, mientras que Geo Group contribuyó para la misma ceremonia en 2016.

El “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump destinó una suma sin precedentes de 45 mil millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para impulsar la detención de migrantes.

Como las dos mayores potencias de detención en Estados Unidos, tanto Geo Group como CoreCivic tienen grandes posibilidades de obtener grandes beneficios.

Tan pronto como Trump ganó las elecciones en noviembre pasado, el precio de las acciones de CoreCivic experimentó un aumento enorme de casi el doble al pasar de 13.63 dólares por acción a 22.13 en sólo una semana. El precio de las acciones de GeoGroup saltó de 15.13 a 25.05.

Esto probablemente se debe a que las instalaciones privadas albergan a 86 por ciento de la población migrante detenida, según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).

Rechazan servicios de contratistas

Sólo seis por ciento de los estadounidenses cree que los centros de detención del ICE deberían ser administrados de manera privada, según revela una encuesta exclusiva para The Independent, y la mayoría dice que deberían ser administradas por los gobiernos federal o estatal, de acuerdo con Prolific.

Más de 60 mil personas se encuentran apresadas en centros de detención de inmigrantes en todo Estados Unidos, según registros del ICE vistos por The New York Times.

La detenciones han aumentado 54 por ciento desde el regreso de Trump, mientras que la población detenida promedio bajo la administración de Joe Biden ronda las 39 mil personas, según TRAC.

Pero aunque el gobierno puede determinar su futuro, los 20 centros de detención más grandes del ICE son operados por empresas privadas, de acuerdo con datos de TRAC de enero. Geo Group y CoreCivic son los operadores líderes, tanto en términos de instalaciones como de capacidad.

Otras empresas privadas, como LaSalle Corrections y Management & Training Corporation, también tienen contratos para gestionar instalaciones del ICE.



CoreCivic tiene a su cargo el centro de detención más grande del país: el centro correccional del condado de Adams en Natchez, Misisipi, con un promedio de más de 2 mil 100 detenidos al día. Sin embargo, el nuevo centro federal en Fort Bliss pronto podría superar a todos los demás, con una capacidad para 5 mil personas.

Tanto CoreCivic como GeoGroup brindan servicios de encarcelamiento tradicionales y de detención de migrantes a los gobiernos federales y estatales.

Pero con una desaceleración en el encarcelamiento y un mayor enfoque en la rehabilitación en los últimos años, los contratos penitenciarios se han ido agotando, y el aumento de los contratos de detención de migrantes se ha vuelto fundamental para sus modelos de negocios.

Una de las primeras acciones de Trump en el cargo también fue poner fin a la prohibición de la era Biden a los proveedores de prisiones privadas, permitiendo que empresas como Geo Group y CoreCivic vuelvan a trabajar con el Departamento de Justicia.

Cuando se le pidió un comentario sobre su dependencia de las políticas punitivas de la nueva administración para construir su negocio, CoreCivic señaló que no hace cumplir las leyes de inmigración, ni arresta a nadie, ni tiene influencia sobre la deportación de una persona, pero reconoció que las políticas de Trump le brindan oportunidades de crecimiento.

“Mientras la administración actual explora todas las opciones disponibles para abordar la creciente demanda de servicios y capacidad de detención, esperamos que esas opciones incluyan las soluciones de alta calidad que ofrece CoreCivic”, dijo Ryan Gustin, director de Asuntos Públicos de CoreCivic, a The Independent.

Mientras tanto, un portavoz de Geo Group dijo que, “en pocas palabras, nuestras instalaciones nunca están abarrotadas”.

Pero las solicitudes de la Ley de Libertad de Información presentadas por TRAC el mes pasado revelaron que varias instalaciones administradas por Geo Group tuvieron un exceso de capacidad significativo en al menos un día de este año.

Esto incluye el centro de procesamiento Pine Prairie de Geo Group en Luisiana, que tiene un máximo contractual de 500 personas, pero que albergó a mil 311 detenidos en algún momento de 2025.

Ganancias millonarias

Las operaciones de inmigración representan más de un tercio de los ingresos tanto de Geo Group como de Core Civic, según muestran los últimos informes financieros, lo que convierte al ICE en su mayor socio gubernamental.

“Estamos orgullosos del papel que nuestra empresa ha desempeñado durante 40 años para apoyar la misión de aplicación de la ley (de ICE) a lo largo de siete administraciones presidenciales diferentes”, dijo un portavoz de Geo Group a The Independent.

Geo Group ha recibido casi 8 mil millones de dólares en contratos federales a lo largo de sucesivos gobiernos, según la base de datos federal, además de contratos estatales. Más de la mitad de esta cantidad fue otorgada por ICE para servicios de detención de inmigrantes.

Mientras tanto, a CoreCivic se le han otorgado más de 8.3 mil millones en contratos federales a lo largo del tiempo, y una cuarta parte de ellos son contratos de ICE para administrar centros de detención.

“El presupuesto de ICE ahora es más grande que el de muchos ejércitos en todo el mundo, mientras que nuestros hospitales y escuelas siguen sin fondos suficientes y la gente está perdiendo su acceso a la atención médica y a los beneficios alimentarios”, dijo Suh.

The Independent contactó a ICE para solicitar comentarios para este artículo, pero no recibió respuesta.

Los contratos federales de ICE han ido aumentando de forma constante desde el primer mandato de Trump (excepto por un breve periodo durante el pico de la pandemia), según la base de datos de gastos federales, pasando de 137.5 millones de dólares otorgados en 2016 a 463.4 millones de dólares en 2025 hasta el momento.

Sólo desde enero, los contratos de ICE adjudicados incluyen 353.5 millones de dólares a Geo Group, 148 millones a CoreCivic y 313 millones a CSI Aviation, el contratista de vuelos de deportación de ICE.

“Cada vez hay más incentivos para encarcelar a personas en centros de detención migratoria. Cuantas más personas detienen, más crece su negocio”, dijo Suh. “Los incentivos financieros son la base del encarcelamiento”, agregó.



Y ahora, documentos vistos por The Washington Post revelan que ICE está planeando más que duplicar la capacidad de detención, de alrededor de 50 mil a más de 107 mil para enero de 2026.

Estos planes incluyen la apertura o ampliación de 125 instalaciones antes de diciembre, con más de mil millones de dólares en contratos cada año entre CoreCivic y GeoGroup, según el análisis del Post de los documentos de ICE.

Ambos gigantes de la detención ya han visto una avalancha de contratos nuevos o modificados y han abierto nuevas instalaciones para ampliar su capacidad.

Es más, ICE ha emitido nueve de estos contratos sin permitir ofertas competitivas con el argumento de una emergencia nacional en la frontera con México, lo que significa que CoreCivic consiguió el acuerdo para reabrir su polémica instalación de Leavenworth sin competencia, según PBS.

“Nos mantenemos en contacto regular con el ICE y todos nuestros socios gubernamentales para comprender sus necesidades cambiantes y trabajamos dentro de sus procesos de contratación establecidos. Nuestra política es respetar estos procesos”, declaró Gustin a The Independent sobre los contratos de CoreCivic.

Más instalaciones

Desde enero, se han abierto varias instalaciones para retener a más inmigrantes a medida que el ICE intensifica sus redadas.

En la ciudad de Baldwin, Míchigan, la antigua prisión del centro correccional North Lake reabrió sus puertas como centro de inmigración operado por Geo Group, con ingresos anuales de 70 millones de dólares. El lugar, con capacidad para mil 800 camas, abrió sus puertas en junio a pesar de la considerable oposición de los residentes y las protestas locales.

Y justo la semana pasada estalló una tensa disputa en una reunión de la junta local en Mason, Tenesi, sobre la reapertura de una instalación de CoreCivic como centro de detención de inmigrantes.

Los residentes abarrotaron la reunión y corearon consignas afuera en protesta por el contrato, que finalmente fue aprobado, según informes del Tennessee Lookout.

“Si los planes de expansión del ICE se concretan plenamente, se producirá un cambio drástico en los recursos. También supone una transformación drástica en la esencia misma de la sociedad estadounidense y su funcionamiento”, declaró Suh a The Independent.

Comunidades de todo el país están indignadas, con razón, por la expansión de los centros de detención en sus propias puertas.

La gente dice: “No, no queremos centros de detención en nuestra comunidad. No queremos que nuestros vecinos sean separados de sus seres queridos”. ([The Independent, La Jornada, Ocho columnas y Mundo, p. 16](#))

Condecora EU a militares que vigilan frontera



WASHINGTON.- El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la creación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana destinada a reconocer a los miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en la frontera con México.

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, detalló en un memorando que el reconocimiento será otorgado a quienes hayan estado asignados o desplegados en operaciones militares de apoyo a CBP dentro de un área de elegibilidad de 180 kilómetros desde la frontera con México, incluyendo Texas, Nuevo México, Arizona, California y aguas adyacentes.

La nueva medalla sustituirá a la Armed Forces Service Medal (AFSM) que se entregaba anteriormente, de acuerdo con el comunicado.

Los soldados que ya recibieron esa distinción podrán solicitar el nuevo galardón en su lugar, aunque no podrán tener ambos por el mismo periodo de servicio.

"Los efectivos que han protegido la frontera sur merecen ser reconocidos por su valentía y contribuciones", afirmó Anthony Tata, subsecretario de Defensa para Personal y Preparación, en un comunicado.

El diseño retoma el de la Medalla de Servicio en la Frontera Mexicana de 1918: una pieza de bronce con una espada romana envainada en el anverso, que simboliza fuerza militar sin combate directo, y el Escudo de Armas de EU en el reverso. (Staff, Reforma, Nacional, p. 4)

(Redacción, El Universal, Nación, p. A2)

(Manuel Ocaño, Excélsior, Global, p. 16)

Jornalero mexicano falleció en Florida por desprotección laboral en el campo



Nueva York y Washington., Marco Antonio Hernández Guevara no debería haber muerto. El jornalero, como tantos más, vino a Estados Unidos para trabajar en los campos de Florida y apoyar a su esposa y tres hijas en México. Ahora regresará a su país para su funeral y aunque la causa de muerte técnicamente fue insolación, la razón de fondo fue la falta de protecciones y normas para los trabajadores agrícolas, las cuales existen y salvan vidas todos los días para quienes laboran bajo el programa Comida Justa.

La granja donde se desempeñaba Hernández Guevara no es parte del programa Comida Justa, que establece protecciones y normas laborales para miles de jornaleros impulsadas por la Coalición de Trabajadores Immokalee y que ha transformado las condiciones de trabajo en los campos agrícolas de unos 13 estados y que ahora es un modelo que están adoptando en otras partes de Estados Unidos así como en varios otros países (desde Chile a Sudáfrica).

La insolación

A fines de la semana pasada llegó la noticia de que un jornalero de la zona de Immokalee había sido transportado a un hospital en la cercana ciudad de Naples, donde estaba en coma. Su esposa pudo llegar desde México gracias al apoyo eficaz del cónsul de protección, José Manuel Murillo Valencia, en la representación diplomática de México en Miami, para estar a su lado durante sus últimas horas, en espera de un milagro que no llegó.

Todo esto ocurrió en un contexto donde los trabajadores enfrentan una ola antimigrante oficial que también nutre un clima hostil en todo el país, con autoridades que dan prioridad a redadas, retenes y la construcción de campos de concentración, incluido el llamado Alcatraz de los caimanes, que no está tan lejos de los campos de la zona de Immokalee.

Por lo tanto, los trabajadores están en situaciones cada vez más vulnerables. En los campos donde no tienen protecciones ni un programa como el de Comida Justa, cada vez menos se atreven a presentar quejas sobre sus condiciones laborales.

De hecho, en el caso de Hernández Guevara, de 35 años de edad y originario de San Luis Potosí, no se trataba de un trabajador indocumentado, sino alguien que llegó cumpliendo todas las reglas. Él ya había completado un contrato como empleado huésped (conocido como la visa H2-A) en mayo, y regresó a Florida en agosto con un segundo contrato, todo para hacer el trabajo esencial de cosechar alimento para los estadounidenses y enviar fondos para sostener a su familia y a su país.

Lucas Benítez, un cofundador de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, en entrevista con La Jornada, comentó que este caso resalta algo demasiado común. La muerte en sí no fue resultado de un asunto político ni algún problema de los gobiernos, sino “de un problema sistémico que ha tenido la industria agrícola en general, en particular aquellas empresas que se benefician con el trabajo de la gente del el campo –los supermercados, las grandes cadenas de restaurantes y productoras– que se niegan a ser parte de los acuerdos del programa Comida Justa”.

Benítez subrayó que el caso de Hernández Guevara “es un ejemplo, porque en el rancho donde ocurrió esta pérdida humana no existe el programa Comida Justa. En los campos que están bajo el plan de apoyo hasta el día de hoy no hemos tenido un solo reporte de un caso de este tipo de insolación.

“Eso es porque esos trabajadores están siendo protegidos, se les dan descansos cada dos horas, toda la maquinaria se apaga y los agricultores se van a la sombra donde toman agua con electrolitos”.

Que un trabajador agrario se enferme por insolación no es nada inusual, de hecho, con el cambio climático las condiciones de calor sólo han empeorado cada año. Investigaciones recientes con estadísticas federales revelan que los jornaleros agrarios tienen 35 veces más probabilidad de morir por calor que trabajadores en otros sectores.

Enfermos por miles

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos calcula que más de 33 mil 890 trabajadores sufrieron enfermedades relacionadas al calor entre 2011 y 2022, y casi mil de ellos murieron. Pero hoy hay estadísticas precisas sobre esto y muchos de estos casos no se reportan.

Con la llegada del gobierno de Donald Trump, expertos y trabajadores pronostican que las condiciones laborales para jornaleros y los de construcción empeoraron como resultado del rechazo oficial de regulaciones vinculadas al cambio climático, como también la ofensiva contra regulaciones de todo tipo, incluidas las laborales.

Por ello, el programa Comida Justa establece normas que considera derechos dentro de sus acuerdos entre trabajadores, granjeros y las grandes cadenas de restaurantes y supermercados que compran el producto, iniciativa lanzada en 2010. El proyecto ha transformado por primera vez las condiciones laborales de miles de jornaleros, entre ellos su derecho a protecciones contra el calor y frenar el hostigamiento laboral y sexual, procesar la resolución de quejas e incrementar sus ingresos económicos. [\(David Brooks y Jim Cason /Corresponsales, La Jornada, P.p. y Mundo, p. 15\)](#)

Amenaza EU a salvadoreño con enviarlo a Uganda si no se declara culpable de tráfico de personas





Washington. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) trata de obligar al migrante salvadoreño, Kilmar Ábrego García, a declararse culpable de los cargos de tráfico de personas o enfrentar la deportación a Uganda, afirmaron ayer sus abogados.

La amenaza llegó luego de que Ábrego rechazó una oferta para ser deportado a Costa Rica a cambio de permanecer en la cárcel y declararse culpable de los cargos, propuesta que incluía el requisito de permanecer en prisión por el momento y luego cumplir la sentencia que recibiría por los delitos que le quieren imputar, según un documento presentado en el estado de Tennessee, donde se lleva su caso.

Sin embargo, después de su liberación el viernes, el ICE notificó a sus abogados que sería deportado a Uganda y que debía presentarse ante las autoridades de inmigración el lunes “en la Oficina de Campo del ICE en Baltimore –para aceptar una declaración de culpabilidad a cambio de la deportación a Costa Rica o, de lo contrario, esa oferta se retirará para siempre”, escribieron sus abogados defensores, quienes declinaron decir si todavía está considerando la oferta de ser trasladado a la nación centroamericana.

Junto con el escrito se presentó una carta del gobierno costarricense en la que indica que Ábrego García sería bienvenido en ese país como inmigrante legal y no enfrentaría la posibilidad de detención.

En tanto, Uganda afirmó el jueves pasado que sólo recibiría a aquellos deportados que no tuvieran antecedentes penales.

En tanto, el ICE arrestó a los mexicanos indocumentados Diego Hernández y Erasto Cruz, el primero con condenas por conducir bajo los efectos del alcohol y por reingresar ilegalmente a Estados Unidos, y quien será deportado.

Mientras Cruz enfrenta una condena a 10 años por agredir sexualmente a un niño en Texas y un juez decidirá sobre su deportación.

Por otra parte, las autoridades chinas instaron a Estados Unidos a poner fin a las acciones “infundadas” (interrogatorios, acoso y repatriaciones injustificadas) de su gobierno contra los estudiantes chinos que llegan a ese país y advirtieron que tomarán las medidas para defender los intereses de sus connacionales, indicó la portavoz de la cancillería china, Mao Ning.

Asimismo, el Departamento de Seguridad estadounidense estableció un área de defensa nacional en el sector Yuma, Arizona, de la Patrulla Fronteriza para “mejorar y garantizar el resguardo de la zona limítrofe sur”, anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El Pentágono informó que creó una medalla de defensa fronteriza mexicana para las tropas estadounidenses que sirven en la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, y ayudan a la policía federal en la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal. ([Prensa Latina y Europa Press, La Jornada, Mundo, p. 17](#))

(Agencias, El Universal, Nación, p. A2)

(AP, Reforma, Internacional, p. 18)

(AFP y DPA, Excélsior, Global, p. 17)

Transportistas migrantes temen aumenten restricciones de EU con suspensión de visas



Migrantes que trabajan como conductores de transportes de carga y que circulan con sus pesadas unidades por las distintas carreteras de Estados Unidos, temen que a raíz la de suspensión de visas a nuevos choferes no estadounidenses aumenten las restricciones por parte del gobierno de Donald Trump.

La suspensión de emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales emitida por el gobierno del republicano es la más reciente acción de una serie de medidas antiinmigrantes que se llevan para restringir la inmigración de trabajadores extranjeros que ya se encuentran dentro del país.

El Departamento de Estado detuvo el pasado jueves la emisión de visas de trabajo para choferes extranjeros de transportes de carga y que buscan convertirse en conductores de camiones comerciales en EU.

El secretario Marco Rubio, atribuyó la suspensión al “creciente número” de conductores extranjeros que operan camiones con remolque en las carreteras estadounidenses que, según dijo en su cueanta de la red social X, pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros nacidos en EU.

TESTIMONIO

“El gobierno (de EU) está siendo muy injusto porque muchos de nosotros llevamos años conduciendo por las carreteras estadounidenses ayudando al país, trabajamos en la pandemia llevando mercancías y en ese momento no le quitábamos el trabajo a nadie”, señaló Salvador, un migrante salvadoreño que no quiso revelar su apellido por temor a represalias.

Este conductor que está amparado por el Estatus de Protección Temporal (TPS) asegura que teme que la Casa Blanca busque revocar su licencia comercial, lo deje sin trabajo e incluso pueda terminar deportado.

El miedo del migrante no es infundado, y es que el gobierno de Trump ha emitido una serie de medidas para limitar el trabajo de camioneros en el país.

PRUEBAS

Desde junio pasado el Departamento de Transporte de EU exige una prueba de inglés para los conductores de carga, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense en abril.

Los migrantes que conducen pesados vehículos con mercancías regresaron al foco público después de un accidente ocurrido el pasado 12 de agosto que se saldó con la muerte de tres personas en el condado de St. Lucie (Florida).

El inmigrante indio Harjinder Singh intentó dar la vuelta en U sin autorización a través de un acceso exclusivo para uso oficial de las autoridades del condado mientras conducía un camión de 18 ruedas, lo que hizo que una minivan en la que viajaban tres personas quedara atrapada, y fallecieran debido al impacto.

Singh, de 28 años, tenía una licencia de conducir comercial expedida en California, gracias a que contaba con un permiso de trabajo válido expedido por las autoridades federales.

PERMISO

Según el Departamento de Seguridad Interna (DHS), Singh ingresó en EU, junto con su hermano, por la frontera sur el 15 de mayo de 2023. Ambos fueron liberados para presentar sus casos frente a una corte de inmigración y se les otorgó el permiso de trabajo.

El conductor fue detenido y acusado de tres cargos de homicidio vehicular, y su hermano, que viajaba con él en el camión, fue detenido por las autoridades migratorias para su deportación.

Singh reprobó un examen de competencia en idioma inglés cuando funcionarios del Departamento de Transporte lo entrevistaron tras el accidente.

El migrante “proporcionó respuestas correctas a sólo dos de 12 preguntas verbales y sólo identificando con precisión una de cuatro señales de tráfico de la carretera”, ahondaron las autoridades. [\(Jesús Sánchez, con información de EFE, La Crónica de Hoy, Mundo, p. 18\)](#)

Fuga de cerebros; Trump veta a estudiantes extranjeros



Miami.— Con la guerra abierta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los estudiantes extranjeros no sólo está cayendo la cifra de alumnos inscritos para los siguientes ciclos, sino que se está desmontando un modelo de poder blando (soft power) que fue, desde los días del Plan Marshall, la joya invisible de la corona estadounidense para influir desde casa a futuros líderes de diversas áreas mundiales, y se provoca una fuga de cerebros.

A través de una orden ejecutiva que suspende las entrevistas para visas estudiantiles en embajadas y consulados estadounidenses de todo el mundo, el gobierno de Trump ha interrumpido una arteria crítica que cada año atraía a más de un millón 100 mil jóvenes estudiantes de todo el planeta para formarse en territorio estadounidense.

De acuerdo con el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, han sido revocadas 6 mil visas de estudiantes en la administración Trump. De ese total, 4 mil fueron revocadas por violaciones a la ley; el resto, por exceder su estadía.



Cuando está por reiniciar el ciclo escolar, una encuesta realizada por el Instituto de Educación Internacional, una organización sin fines de lucro que trabaja con gobiernos y otros organismos para promover la educación internacional, en más de 500 facultades y universidades, reveló que 35% de los centros experimentaron un descenso de las solicitudes procedentes del extranjero la primavera pasada, el mayor desde la pandemia.

La administración Trump afirma que lo hace en nombre de la seguridad nacional, del combate al comunismo chino, del antisemitismo universitario, pero los expertos advierten de las consecuencias.

“Se trata de una estrategia contraproducente para Estados Unidos”, señala a EL UNIVERSAL el académico e investigador social, Octavio Pescador. “Una de las formas más importantes para que Estados Unidos mantenga la hegemonía ideológica en el orbe es precisamente cultivar las élites de otros países en Estados Unidos”, señala.

El golpe ha sido dirigido directamente a la médula de universidades como Harvard, MIT, Yale, Stanford, Columbia, Cornell o la UCLA y todo el sistema de Universidades de California y otros estados. Estas instituciones no sólo lideran la investigación mundial, sino que dependen financieramente y académicamente de sus estudiantes internacionales. Harvard, por ejemplo, reporta que más de 31% de su alumnado proviene del extranjero y sus programas de posgrado en ingeniería y computación, como en muchas otras universidades de élite, dependen en un 70% de cerebros que nacieron fuera de las fronteras estadounidenses.

El 56% de todos los estudiantes internacionales en 2024 estaban matriculados en campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), con una concentración especialmente alta en matemáticas, ciencia de datos, biotecnología, robótica, criptografía, inteligencia artificial y energía nuclear. Áreas que el Departamento de Seguridad Nacional ha comenzado a clasificar como “vulnerables a la infiltración extranjera”.

Pero el impacto no se limita a las aulas de ciencia. Las cifras muestran también una compleja red de presencia global; 71% de los estudiantes internacionales en Estados Unidos provienen de Asia, seguidos por un 8% de Europa, 7.6% de América Latina, 5% del África subsahariana y un resto disperso entre Medio Oriente y Oceanía. Los principales países emisores siguen siendo India (331 mil 602) y China (277 mil 398), aunque Vietnam, Nigeria, Bangladesh, Corea del Sur y Canadá representan flujos crecientes.



Desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025, el número total de estudiantes extranjeros cayó 11.3%, lo que ya había encendido alarmas dentro del ecosistema universitario. Una parte considerable ha migrado hacia sistemas más estables en Alemania, Francia, Canadá, Japón, Corea del Sur o Australia, donde las condiciones de visado y el clima político son más estables.

“A los muchachos —estudiantes internacionales— les afecta seriamente lo que está sucediendo, es una incertidumbre”, dice Pescador, académico de la UCLA; no comprende por qué han prohibido o limitado la entrada de estudiantes internacionales, si “la CIA y el FBI revisan y verifican el nivel de ‘veto’ que cada solicitud estudiantil podría recibir”, añade. Es decir, “la examinación exhaustiva de los antecedentes de cada uno de los candidatos —estudiantes— elegibles” la llevan a cabo las autoridades estadounidenses antes de llegar a Estados Unidos.

Las protestas propalestinas en campus como Columbia, UCLA, MIT y NYU, entre otras, han sido la excusa que ha usado la administración Trump para endurecer su narrativa. En mayo, el presidente acusó a “ciertas universidades de estar financiando el odio antisemita con dinero del contribuyente” y propuso la suspensión inmediata de fondos federales a toda institución que no “colabore con los valores constitucionales estadounidenses”. En Columbia, una de las universidades que más estudiantes internacionales alberga, el Departamento de Justicia ha iniciado una auditoría federal alegando “tolerancia institucional al discurso hostil contra la nación aliada de Israel” y puesto en duda su acreditación.

El Departamento del Tesoro, encabezado por Scott Bessent, uno de los cerebros económicos más poderosos del gobierno trumpista, congeló más de 2 mil 600 millones de dólares en subvenciones federales a Harvard, acusándola de “colaborar con intereses académicos enemigos”. La medida fue parcialmente revertida por un tribunal federal, pero el mensaje es contundente: ningún bastión liberal está a salvo si aloja ideas incómodas. De hecho, a todas las universidades de élite en la Unión Americana les han quitado recursos.

Pescador subraya que muchos de los estudiantes extranjeros “que vienen [a Estados Unidos] son hiperdestacados, gente muy sofisticada en términos de su desempeño académico y sus capacidades analíticas y técnicas; y las empresas estadounidenses los reclutan. Sobre todo, en áreas de computación, de ingeniería eléctrica, inteligencia artificial y demás áreas. Y todo ese talento se va a perder”.

Las universidades no han permanecido en silencio. Harvard, Stanford, Princeton, Columbia, Yale, Johns Hopkins, el sistema de la Universidad de California y decenas más han respondido con litigios, cartas abiertas, campañas de prensa y, sobre todo, con redes de apoyo legal, financiero y diplomático para sus estudiantes internacionales.

La presidenta de Yale, Maurie McInnis, declaró: “No aceptaremos que un decreto político defina quién puede aprender o enseñar aquí. Defenderemos nuestra comunidad internacional con todos los recursos legales disponibles”. Desde Princeton, Christopher Eisgruber advirtió que “cerrar nuestras puertas al talento del mundo no es patriotismo, es suicidio cultural”.

A esa resistencia se han sumado poderosos exalumnos. Barack Obama (Harvard), Hillary Clinton (Yale), Kamala Harris (UC Hastings), Elena Kagan (Princeton), Merrick Garland (Harvard), Eric Holder (Columbia) y figuras clave del sector privado como Sundar Pichai (CEO de Alphabet, egresado de Stanford), Reed Hastings (Netflix, Stanford) y Satya Nadella (CEO de Microsoft, exalumno de la Universidad de Wisconsin) quienes han comenzado a manifestarse públicamente o a movilizar fondos para defender el carácter internacional de las universidades estadounidenses. Muchos de ellos emplean directamente a miles de egresados extranjeros y saben que cualquier política de exclusión académica en Estados Unidos terminará afectando el ecosistema de innovación tecnológica y científica.

La vieja doctrina de formar a las élites del mundo en Estados Unidos para influir en sus países ha sido reemplazada por una lógica defensiva. Ya no interesa que los futuros presidentes, científicos o ministros estudien en Massachusetts, Nueva York o California; interesa que no traigan consigo ideas peligrosas, que no lideren protestas, que no debatan la narrativa oficial. Trump lo dijo sin contrapesos desde 2020: “China manda a sus mejores estudiantes, pagados por su gobierno, para aprender en nuestras universidades cómo vencernos”.

No sólo los cerebros se están fugando a otros países —se ha reportado un incremento de solicitudes de transferencia de estudiantes extranjeros a Hong Kong, a Reino Unido—. Los ingresos por matrícula extranjera sostienen programas de investigación, subsidios internos, becas comunitarias y hasta estructuras salariales, que hoy se están perdiendo por la política de Trump. La economía también se verá afectada. De acuerdo con un análisis de la agencia NAFSA, que promueve la educación internacional, el desplome de la matrícula internacional privaría a Estados Unidos de 7 mil millones de dólares en gastos. ([Max Aub, El Universal, Mundo, p. A12](#))

Remesas

Alertan subregistro en envío de remesas



El envío de remesas del extranjero, particularmente Estados Unidos, podrían tener un subregistro debido a que los depósitos son "convertidos" en transferencias vía el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), según expertos.

Tradicionalmente, las compañías de envíos de remesas (Wells Fargo, Moneygram, Remitly, etc.) realizan entregas de remesas en cuentas de bancos en México .



Consuman una transferencia al banco donde está alojada la cuenta del destinatario, lo que permite un control robusto sobre el remitente, por parte de las empresas de remesas en EU, como del destinatario, por parte de los bancos mexicanos donde está alojada la cuenta.

Sin embargo, desde hace algunos años, algunas Fintech se han convertido en un jugador más al actuar como intermediarias en la transacción.

Las empresas Fintech reciben el dinero enviado desde EU ya convertido en pesos, y luego lo depositan al banco del destinatario en México como una transferencia nacional.

Esto genera un "agujero" que permite desde EU hacer uno o varios depósitos en dólares vía transferencia a una misma cuenta bancaria, pero en México la transferencia pasa por SPEI.

El banco final del destinatario no registra esta transferencia como una "remesa del exterior" sino como una simple "transacción SPEI" entre bancos mexicanos. Al final, esta nueva práctica hace que la trazabilidad de la remesa se haga más difícil.

Grupo REFORMA hizo una operación de remesas utilizando la aplicación de Remitly para transmitir dinero de Bank of America a una cuenta de un banco en México.

El recibo demostró que el depósito no lo realizó Remitly desde EU sino el operador de switch Uniteller desde una cuenta de otro banco mexicano. La operación fue registrada por el cuentahabiente como una simple "transacción SPEI" entre bancos mexicanos.

Las operaciones se pueden realizar a varios destinatarios con nombres ficticios. Varias operaciones realizadas en el ejercicio se hicieron a nombres ficticios que no correspondían al destinatario real, aunque sí se hicieron al mismo número CLABE de la cuenta bancaria mexicana.

Nombres como 'Juan Escutia' y otros fueron registrados como destinatarios en la transferencia de Remitly, pero en el proceso de entrega al destinatario real los nombres ficticios no aparecen sino el remitente de la transferencia monetaria es una Fintech mexicana.

El dinero es entregado a su real destinatario, una persona física verdadera.

Tan sólo en junio, el Banco de México registró una caída de 16.2 por ciento en el monto de las remesas que llegaron al País, comparado con el mismo periodo de 2024, lo que alcanzó los 5 mil 201 millones de dólares y se originaron 12.7 millones de transacciones individuales en el mes.



Las autoridades estiman que 48 por ciento del monto de las remesas llega directo a cuentas bancarias.

Sistema pionero

Lanzado por Banco de México en 2004, el SPEI ha sido un sistema pionero en el mundo que ha colocado a México al frente en eficiencia de pagos interbancarios y en él participan tanto bancos tradicionales como instituciones de financieras no bancarias incluyendo nuevas firmas de tecnología financiera.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha manifestado su preocupación por el uso del sistema SPEI para el pago de remesas.

De acuerdo con los expertos consultados, bajo esta modalidad la Fintech mexicana recibe en pesos la transferencia de EU.

Esto quiere decir que, por ejemplo, un transmisor (MoneyGram, Wellas Fargo, Remitly) recibe dólares en la transferencia que solicita el migrante desde una app. Este transmisor le transfiere pesos a una Fintech que a su vez ya en territorio nacional dispersa esos fondos a la cuenta de un banco.

Conforme las fuentes, las Fintechs deberían reportar al Banco de México el movimiento de cada transferencia internacional de remesas familiares (en los dos tipos clasificados como tipo 35 y tipo 36 según la legislación), pero simplemente no lo hacen y suelen pasar bajo el tipo 01 (referido a transferencias vía SPEI nacionales), de modo que cuando un banco en México recibe esa remesa no tiene ninguna capacidad para monitorear esa actividad.

Si bien las Fintechs tienen autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV) para operar, están realizando actividades de procesamiento y pago de remesas familiares, incumpliendo sus obligaciones de monitoreo y controles para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según los expertos. [\(Staff, Reforma, Nacional, p. 2\)](#)

Seguridad

EU entrena a policías en Michoacán



Elementos de seguridad de Michoacán que diariamente combaten a los grupos delincuenciales, recibieron capacitación de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica.

En el Campo de Tiro de la tenencia de Capula, expertos enviados por la embajada estadounidense enseñaron a los agentes del Agrupamiento de Artefactos, Explosivos y Materiales Peligrosos, cómo identificar los distintos artefactos explosivos improvisados usados por la delincuencia.

El objetivo es que los oficiales de la Guardia Civil y de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como policías de otras cinco entidades, puedan tener un registro preciso de los explosivos utilizados en enfrentamientos, ataques contra la población o atentados contra las policías.

“Es un curso que los especializan en levantamiento de evidencia, pero enfocado a artefactos explosivos, improvisados. Esto sirve para saber qué tipo de componentes tienen los artefactos explosivos y el investigador con esto va a aprender cuál es la evidencia que tiene que buscar”, explicó Carlos Roberto Gómez Ruíz, encargado del Agrupamiento de Artefactos, Explosivos y Materiales Peligrosos.

Michoacán es el estado con más uso de artefactos explosivos, debido a que los materiales son fáciles de conseguir, se han convertido en un instrumento criminal accesible para todos los grupos delictivos.

Los agentes especializados en Técnicas de Investigación Posteriores a Explosiones, que han trabajado en países con Afganistán e Irán, usaron restos de artefactos para instruir a 33 agentes mexicanos.

Autoridades consideran que esta colaboración no representa intervencionismo del gobierno estadounidense ni pone en riesgo la soberanía nacional. “Esta es una colaboración, al mismo tiempo que ellos nos están brindando alguna asesoría”, dijo Juan Oseguera Cortés, secretario de Seguridad estatal. (*Charbell Lucio, El Herald de México, Estados, p. 9*)

Cárteles pasan charola a negocios en su disputa por Veracruz



DOMINGA.— Aquí el diablo anda suelto pero tiene rato. En el norte de Veracruz se pelea por mucho y se mata por menos. Totonacapan y la Huasteca se han vuelto un triángulo de las bermudas con vista al Golfo de México. Acá no desaparecen barcos pero sí personas. Cientos de ellos terminan después en la plancha del forense.

Desde aquí pobladores han denunciado dos grandes fosas clandestinas: “La Gallera” y “Totolapa”, en el municipio de Tihuatlán. Un basurero criminal en la Huasteca, donde apenas cuatro kilómetros separan uno de otro. Del primero se extrajeron miles de fragmentos óseos; y del segundo, según reportes de colectivos de familias buscadoras, más de 40 cuerpos, en abril de 2023.

Aquí, en el norte jarocho, se pelea por mucho. Cobro de piso a los giros negros; extorsión y cuota a restaurantes y comercios; trata de personas, robo de gas y huachicol; tráfico de estupefacientes, secuestro de políticos y empresarios; extorsión a pequeños comerciantes –polleros, verduleros, peluqueros–; reclutamiento forzado a taxistas, quienes pagan cuota para poder trabajar, pero que también son halcones sin proponérselo; robo de ganado y control absoluto de la llamada mercancía pirata.



Es una guerra ominosa, silenciosa e intermitente en un infierno llamado Veracruz que libran células de las Fuerzas Especiales Grupo Sombra – también conocida como la Mafia Veracruzana–, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Gente Nueva, organización aliada del Cártel de Sinaloa, quienes pelean palmo a palmo las actividades ilícitas de una decena de municipios veracruzanos. Unos con salida al mar y otros con salida a la sierra poblana.

Este agosto más de 30 personas fueron asesinadas en los municipios de Tuxpan, Papantla, Poza Rica y Álamo. Habitantes recuerdan que hay una guerra silenciosa desde hace varios años por el control territorial de una decena de municipios del norte. Es por tráfico de drogas sí pero también por pelear palmo a palmo sus zonas de extorsión y “cobro de piso”, y porque en sus alianzas con comandantes policíacos locales luego hay algunos que cambian de bando.

El pasado sábado 2 de agosto un motín con fuego irrumpió en el penal de Tuxpan con saldo de nueve muertos y seis cadáveres con huellas de violencia extrema al otro día en Papantla; fueron aventados en la carretera Cazones-Poza Rica. El mensaje era claro: sembrar terror en una autopista por demás visible y clave para quienes transitan en la región norte.

De los seis ejecutados, hay una persona no identificada aún, cuatro civiles y un personaje clave: el agente de tránsito municipal de Tuxpan, Juan Carlos Santiago Casco, de quien sus mismos compañeros señalan que era el engrane entre el CJNG y policías locales de Tuxpan y Poza Rica.

En redes sociales, reos afines al Grupo Sombra fueron exhibidos en un video relatando cómo llevaban a cabo la extorsión y el cobro de piso desde la cárcel. Incluso señalan que, desde ahí, se dio la orden de matar a la maestra jubilada, Irma Hernández, quien fue videograbada dando un mensaje en donde pide “pagar cuota” al Grupo Sombra y no a otro grupo delincuencia. Irma, quien también conducía un taxi, sería encontrada dos días después sin vida en el interior de un predio baldío.

Una semana después, cuando se pensó que los 300 hombres de la Guardia Nacional habían ayudado a retomar la calma, dos bombas molotov fueron arrojadas desde unos drones en el penal de Tuxpan.

Se viven días de tensión se viven en Veracruz

Es el primer domingo de agosto de 2025. Día soleado, un calor infernal en la Huasteca –36 grados a la sombra–, voy de copiloto de un militar retirado que hoy hace funciones de escolta de empresario. La camioneta negra en la que viajamos es fotografiada un par de veces, por lo que a todas luces parecen “halcones” de la delincuencia organizada.



Transitamos por las carreteras de Poza Rica, Tuxpan, Cazones y Papantla. En un restaurante familiar desayunamos barbacoa. Al momento de prender su camioneta, el militar en retiro recita en voz baja esta oración:

“Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen. No permitas que me sorprendan por la espalda, no permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame. Tú que todo lo conoces, sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe, no me desampares”.

Desconcertado, trago saliva, quiero hacer mil preguntas. Pero el militar se levanta el lado derecho de su guayabera blanca y se asoma un tatuaje de la Santa Muerte. Al militar lo llamaremos Omar. “Alguien nos tiene que cuidar por acá. Tú no temas”, dice. Y sí, no hay de otra, en esta tierra sin ley sólo queda encargarse a la Santísima y al cristo de Tihuatlán –el segundo más grande de América Latina–. Peor es nada.

En Poza Rica, Tuxpan y Papantla el cobro de piso está insostenible, un “impuesto criminal” que el narco cobra a placer a todo aquel integrante de la sociedad económicamente activa que sea sujeto de ser extorsionado: empresarios, propietarios de giros negros, taxistas, transportistas, polleros, dueños de verdulerías, peluqueros, ni los dueños de una modesta panadería escapan a esta extorsión de la Mafia Veracruzana, CJNG o la Gente Nueva.

Grupos criminales exigen a negocios el cobro de piso en Veracruz

Raúl, es un empresario harto de la violencia, se cansó de quejarse en el municipio de Poza Rica y Tuxpan y de suplicar ante autoridades en Xalapa, la capital del estado, por el cobro de piso. Optó por pagar 34 mil pesos mensuales. Los tiene que “invertir” para que lo dejen trabajar en paz. Me confiesa que la cosa está de la chingada:

“Un grupo criminal te cobra los lunes; otro los miércoles. ¿Cómo sostienes un negocio así? Imagínate la bronca para los giros negros”.

Abre su teléfono celular, muestra un video afuera de su negocio y cómo llega el narco a extorsionar. Dos jóvenes encapuchados, vestidos de negro y con armas largas llegan a golpear directamente a sus empleados. Rompen un florero de vidrio. Con armas largas los encañonan, en el video se ve que son jóvenes sicarios que difícilmente rebasan los 20 años. No roban, torpemente levantan las armas y tiran cosas al piso, siembran terror. Y amenazan que en unos días pasarán por la “cuota”.



Raúl muestra el video de un colega restaurantero. Otros sicarios vestidos de civil entran, le dan dos golpes al de la caja, le gritan palabras obscenas y le dejan un “recado” –el primer aviso– de que requieren el dinero en los próximos días. De la barra toman un flan y un pay de queso. Tiran al suelo otros bocadillos y se retiran con tranquilidad. Poco antes, había pasado una patrulla de la policía municipal en un recorrido de rutina.

En un video compartido desde del centro de Poza Rica, tres sicarios –con los rostros cubiertos con pañuelos– descienden de una camioneta blanca, se aprecia que uno de ellos batalla para “cargar el arma”, pasan a cobrar la extorsión. Un chofer los espera con el motor encendido. La improvisación es tal, que uno de los sicarios se equivoca e intenta abordar el vehículo equivocado.

“Son carne de cañón del narco, jóvenes sacados de las colonias que les ofrecieron lana, droga y alcohol y los sacan a delinquir. Total la autoridad no tiene ánimo de meterse con ellos. Los que manejan el negocio. Hay mucha colusión”.

En Tuxpan, en el Mercado Héroes del 47 nadie se salva del cobro de piso. Todo aquel comerciante, verdulero, carnicero, pollero, hasta los yerberos se tienen que reportar con el CJNG. El pago es de cinco mil pesos mensuales por pollería. Miguel, un distribuidor de productos avícolas, se emborrachó hace un par de meses, de felicidad, al ver en la televisión que una célula del cártel había sido detenida y desarticulada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. A su esposa hasta le contó: “Por fin estos hijos de la chingada, me van a dejar de robar”.

En un fotograma presentado en un noticiero de la televisión local, Miguel reconoció a cuatro de los cinco sicarios detenidos, quienes eran los que pasaban a las pollerías de las que es propietario: “Yo dije, ya chingue. Pero ¡que madres! El lunes puntualito, ahí estaban otros sicarios armados, igual de chamacos que los anteriores, que a nombre de Jalisco Nueva Generación venían por su cuota!”.

En Poza Rica, la extorsión ya alcanzó hasta a los vendedores de terrenos y de casas habitación. Por cada predio, casa o departamento vendido o rentado, los empleados de bienes raíces tendrán que entregar un “diezmo” de la ganancia total.

En un sitio de taxis en Álamo el narco cobra mil 200 pesos mensuales para poder trabajar con tranquilidad. Los enviados cobran a plena luz del día, poco les importa que crucen patrullas municipales o estatales. En otras ciudades de corte petrolero o portuario, el impuesto criminal se eleva a los mil 600 pesos por mes.

Se vive una guerra entre grupos criminales que no dan cuartel

Está guerra no es de ahora. Arrancó hace ratito, el 13 de agosto de 2023, cuando aparecieron restos humanos cortados y emplayados al vacío en tres congeladores industriales de Poza Rica. La fiscal Verónica Hernández Gidáns admitiría que se trataba de más o menos 13 cuerpos y serían enviados al centro de identificación humana de Nogales, dijo, para “facilitar” su identificación.

Pero el CJNG, tan afecto a tener voceros en la región confirmaría que en realidad fueron restos humanos de 35 personas, varios de ellos de nacionalidad centroamericana. Era una forma de por lo menos intimidar a Grupo Sombra pero el revés vendría después.

La negación sistemática y el ocultamiento de cadáveres evocó los tiempos de ocultamiento de muertos y de violencia, cómo lo hacía de forma casi magistral el exgobernador Javier Duarte y sus jefes de seguridad y procuración de justicia, Arturo Bermúdez Zurita Capitán Tormenta y Luis Ángel Bravo.

En la comunidad de Acontitla, en abril de 2023, hubo otro capítulo de está guerra, una familia fue privada de la vida. Los encontraron formados en el patio de una casa, emulando un pelotón de fusilamiento. La madre, quien era narcomenudista, logró huir cuando escuchó el rugir de las motocicletas subiendo cuesta arriba en un camino de grava y arena. Envío al velorio dos ollas de tamales de barbacoa y un mariachi traído de Poza Rica para honrar a sus familiares.

Desde entonces en la prensa local, periódicos y páginas digitales diario se consignan “levantamientos”, ataques a negocios, rafagueo de bares o comercios que no pagan extorsión, así como los homicidios o ejecutados del día a día.

El oficial de tránsito, Ernesto León Sánchez, de 34 años, salió de su turno en la delegación de Poza Rica a las 6:25 de la tarde del día 21 de abril del 2023. A un ladito, se metió en un centro de lavado de autos para pasar al baño. Testigos narran que tres encapuchados, armados interceptaron a León y lo subieron a una camioneta blanca: “Lo llevaban esposado y con la cabeza agachada”. Detrás de ellos, iba un coche rojo.

Un par de días antes de la desaparición de León, el albañil Ángel Giovanni Vidal Mateo, de 28 años, cumplió tres meses de no llegar a casa. El día de la desaparición, padre e hijo iban juntos a una obra a poner una “loseta” en la colonia Tepeyac y, a un par de cuadras de llegar, en la calle Vicente Guerrero, el joven le pidió a su papá que le “invitara un chesco” y “chance” pasar a ver a un amigo.

Faltaban pocos minutos para las ocho de la mañana. Las horas y los días pasaron y a Ángel se lo tragó la tierra. Semanas después vecinos le dirían a Ángel que a su hijo se le vio caminando en otro pueblo cercano, con otros jóvenes, pero nada ha logrado saber de él.

Veracruz continúa siendo el tercer lugar nacional en miles de números de desaparecidos en el país, solo detrás de Jalisco (15 mil 528 casos registrados) y Tamaulipas (13 mil 545), en territorio veracruzano, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene 6 mil 994 casos, aunque colectivos de familiares de desaparecidos consultados aseguran que son más de diez mil en Veracruz.

La esposa del joven albañil Ángel Giovanni recibió una llamada telefónica, le pedían quince mil pesos de recompensa para regresarle con vida al joven de 28 años. Sin embargo, no aportaron prueba de vida ni nada. Curiosamente, esa llamada vino después de que el padre de Ángel puso la denuncia en la Fiscalía General del Estado, en donde había dejado sus números de contacto.

Su padre ahora, en 2025, todavía anda cargando a todos lados una galería de fotos de su hijo en su teléfono celular. Lamenta que en esas colonias donde vive, Parcela y Tepeyac, han ocurrido desapariciones silenciosas durante los últimos tres años.

Las amenazas de Grupo Sombra en Veracruz

Tras el motín de Tuxpan, en un video filmado en la sierra veracruzana, una veintena de sicarios autoidentificados como Grupo Sombra recriminan a los que se fueron con el CJNG, el cártel contrario, dejando claro que sí quieren mantener la guerra, habrá guerra. El mensaje lo da un encapuchado que se hace llamar “comandante Felix”.

En el video se alude a pelear la plaza de Cazones, un municipio costero en donde el 18 de marzo de 2024, en pleno zócalo, donde se encuentran las letras multicolores para tomarse una selfie, cinco sicarios con armas largas tiraron dos cuerpos del sexo masculino y, para llamar la atención del pueblo, sus victimarios tirarían también ráfagas de disparo al aire. Cualquier parecido con la película El Infierno, de Luis Estrada, es mera coincidencia. Luego vendrían cabezas y restos humanos abandonados en hieleras del Oxxo en Poza Rica; balaceras de larga duración en Tuxpan y municipios aledaños. Hoy la historia parece volver a repetirse.



Desde la Ciudad de México, el viernes 15 de agosto, ante pregunta expresa de la prensa en la Mañanera, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, atajó que ya hay una estrategia de seguridad para combatir el delito de extorsión y, en el caso de Veracruz, se tiene amplia coordinación con las autoridades estatales para continuar con la detención de Mafia Veracruzana del Grupo Sombra.

“Por instrucciones de la presidenta tuvimos una reunión de Gabinete de Seguridad con la gobernadora, Rocío Nahle García. Ya hay detenidos en el caso de este grupo delincuencial, en el marco de la estrategia nacional contra la extorsión ya tenemos un despliegue para continuar con las detenciones”. Falta ver que dicen Grupo Sombra y CJNG. [\(Noé Zavaleta, Milenio, Domingo, Online\)](#)